



Bolivia

Nro. 304

20 de agosto de 2022

Desinformación y sabotaje al proceso autonómico del territorio guaraní de Huacaya

Gonzalo Baptista Mercado

Comunicador del IPDRS.

El pasado 31 de Julio en la comunidad de Mboikovo perteneciente al municipio de Huacaya ubicado en el departamento de Chuquisaca, Bolivia, se esperaba que se lleve a cabo un proceso de elección de autoridades indígenas, como parte del proceso de consolidación de la Autonomía Indígena Originaria Campesina del territorio guaraní. Esto no pasó debido a que las autoridades del Estado central, que debían supervisar el proceso, no llegaron hasta la comunidad debido al bloqueo de caminos que organizaron los sectores que se oponen al proyecto autonómico del territorio guaraní.

Lo preocupante del tema es que no es el único que proceso autonómico que se ve perjudicado por diferentes sectores que, intermitentemente y con diferentes intereses, se oponen a la autonomía. En Macharetí, perteneciente al mismo departamento, se organizó una reunión en la que se dieron cita algunos representantes del Viceministerio de autonomías. Los asistentes dieron a conocer su rechazo al proceso con argumentos totalmente inválidos, como que se arrebatará la mitad de la producción agropecuaria al gobierno indígena, que las autoridades electas bajo el gobierno indígena no serán renovadas, que al convertirse en autonomía indígena ya no se recibirán recursos de parte del Estado, que se cobrarán los servicios de educación y salud, entre otras falacias, y que señalan temas normados en la Constitución Política del Estado, la Ley de Autonomías y el estatuto autonómico aprobado por el Tribunal Constitucional. Esta desinformación se propaga en busca de defender intereses políticos, personales y grupales, que comparten los sectores detractores de un proceso que inició en el año 2009 y se desarrolló con una campaña que planteó la interculturalidad y el diálogo, y fue ampliamente abierto y participativo.

Lo que muchas personas no quieren comprender es que al tomar medidas como el bloqueo y el impedimento de la realización de la elección de autoridades no solo se perjudican a sí mismos, sino que también están vulnerando los derechos de los pueblos indígenas a la libre determinación que están aprobados incluso por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por otro lado, tampoco consideran la normativa boliviana que en la Ley 031 marco de autonomías y descentralización “Andrés Ibáñez” respalda y da total legalidad a las



autoridades indígenas a realizar el proceso de conversión de municipio a Autonomía Indígena Originaria Campesina, cuyo estatus, reconoce y restituye el gobierno a los pueblos indígenas preexistentes al Estado boliviano y garantiza los derechos y participación política a todos los sectores, aún los minoritarios, de estos territorios saneados y titulados a favor del pueblo guaraní.

A pesar de que existan leyes y normativas bolivianas e incluso internacionales, no es casual que las autoridades correspondientes llegado el momento de hacer respetarlas, simplemente deciden quedarse de brazos cruzados, e incluso, colaboran de cierta manera a los atropellos que estos opositores comenten contra las autoridades indígenas y el mismo ejercicio mismo de la democracia y sus mecanismos de elección de autoridades.

Por otra parte, es de conocimiento público que los funcionarios públicos de niveles municipales están respaldando este tipo de movilizaciones y bloqueos, con el afán de asegurar su fuente laboral, incurriendo incluso en el incumplimiento de deberes. Ni qué decir de los recursos municipales que se están gastando en movilización de personas que no son del municipio Huacaya y que deciden intervenir y frenar un proceso democrático, refrendado por el Tribunal Constitucional Plurinacional. Solo con esta movilización de recursos y personas externas se puede hacer frente a los guaraníes, que evidentemente son muchos más, y que llevan años luchando por su libertad frente a las haciendas que se habían incrustado en sus territorios, en el saneamiento y titulación de su territorio, y luego, en su autonomía y autogobierno.

La situación es tan crítica que incluso existe en el imaginario de algunas personas, la idea de que las Instituciones de apoyo y cooperación son las causantes de estos problemas, manipulan a los dirigentes indígenas para impedir estos procesos y no consideran la voluntad de la mayoría. En su forma de argumentación afirman que ellos “nunca estuvieron de acuerdo”, que se realizaron asambleas fraudulentas en las que se aprobaron mociones e incluso el estatuto autonómico. Cuando en realidad estos procesos, durante años marcaron la agenda organizativa de toda la población y fueron refrendados uno a uno, por diferentes instancias del gobierno central, precisamente porque son parte del camino regular que establece la ley marco de autonomías.

Existen diferentes formas de desinformación que se propagan en el territorio, con argumentos totalmente inválidos, como los mencionados fragmentan un tejido social intercultural que se ha construido hace décadas y que, lamentablemente, debe ponerse en riesgo por intereses de personas y grupos políticos que ven que sus privilegios se ven amenazados circunstancialmente. Esta campaña de desestabilización, de freno a la restitución territorial indígena y sabotaje al autogobierno y la libre determinación largamente demandadas por los pueblos indígenas, irrespeta el tiempo de las indígenas que, sin percibir un ingreso por el trabajo de tramitar y promover su autonomía, con constancia y perseverancia, hasta conseguir llegar a esta recta final, en la que, a punto de consolidar la autonomía y administrar sus recursos de manera más adecuada a sus necesidades socioeconómicas.



Muchas personas, guaraní y no guaraní, apuestan por el autogobierno, ya que es una esperanza de un futuro mejor para un territorio, múltiplemente presionado por agentes que buscan imponer modelos de producción basados en el monocultivo, la ganadería extensiva y promueven la exploración hidrocarburífera, que tiene altos impactos ambientales.

El ex alcalde de Huacaya Rober Rivera menciona que la autonomía “es la única forma de tener una mejor administración de recursos que realmente lleguen y atiendan a comunidades que lo necesiten, ya que los Mbvuruvichas conocen realmente lo que hace falta (...) debido a la complejidad del territorio que está dividido en dos (Santa Rosa y Villa Huacaya), el gobierno paralelo que plantea la autonomía haría que se coordine de mejor manera ciertas acciones que puedan beneficiar a ambos”.

A día de hoy, las elecciones en Huacaya se han suspendido en tres ocasiones y las voces en su contra se están acrecentando debido a la desinformación y tergiversación. A pesar de los intentos y esfuerzos de las autoridades indígenas para garantizar sus procesos, al parecer estos nunca serán suficientes, pues pese a cumplir con los requisitos de la ley y la legitimidad de la Constitución del Estado Plurinacional, no cuentan con la ayuda de las instituciones del Estado y de la fuerza pública. Ya está en curso una denuncia contra el Tribunal electoral departamental de Chuquisaca, su brazo ejecutor SIFDE y a los ex funcionarios que están detrás de este movimiento. Sin embargo, esto no es garantía de nada, y las familias y comunidades guaraní sienten el agotamiento del arduo proceso autonómico y de años de subordinación y relegamiento del ámbito público.

Esperemos la fuerza y la voluntad del pueblo sea más fuerte que la burocracia y los intereses personales y grupales, para que los pueblos guaraní puedan vivir el sueño que buscan desde hace generaciones, el sueño de ser libres, de no agachar la cabeza, de no tener dueño o como se dice en guaraní IYAMBAE.